

LA GUERRA VA A LA ESCUELA





LA GUERRA VA A LA ESCUELA

Índice

Contexto.....	9
Costos.....	15
Víctimas del conflicto armado en edad escolar.....	19
Reclutamiento de menores de edad.....	26
Maestros golpeados por el conflicto.....	31
Desmovilizados en el sistema escolar.....	35
Putumayo, un caso para observar.....	39



© Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

La guerra va a la escuela

Juliana Castellanos Díaz

E ISBN: 978-958-8721-50-7

Editorial Politécnico Grancolombiano

Calle 57 No. 3 – 00 Este Bloque A Primer piso

PBX: 7455555 ext. 1170

www.poligran.edu.co/editorial

Julio de 2016

Bogotá, Colombia

**Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes**

Fernando Dávila Ladrón de Guevara

Rector

Jurgen Chiari Escovar

Vicerrector académico

Sergio Hernández Muñoz

Decano Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes

Eduardo Norman Acevedo

Director editorial

Hernán Dario Cadena

Corrección de estilo

Alejandro Hernández Acosta

Armada electrónica

Diego Bello Valderrama

Vanessa Casas Castañeda

Diseño de portada

Cómo citar este libro:

Castellanos, J. (2016). La guerra va a la escuela, Bogotá: Editorial Politécnico Grancolombiano.

El contenido de esta publicación se puede citar o reproducir con propósitos académicos siempre y cuando se dé cuenta de la fuente o procedencia. Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor.





CRÉDITOS

DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN

Juliana Castellanos Díaz

PERIODISTAS PRACTICANTES

David Valbuena Rojas
Camilo Valbuena Rojas
Yelenkalindy Avila Coronel

ASESORES DISEÑO GRÁFICO

Alfonso Llerena Polo
Leonardo Páez Vanegas

DISEÑADOR GRÁFICO

Alejandro Hernández Acosta

EQUIPO DISEÑADORES

Diego Bello Valderrama
Vanessa Casas Castañeda
Karen Gonzáles-Rubio Z.

FOTOGRAFÍAS

Juliana Castellanos Díaz

CORRECCIÓN DE ESTILO

Hernán Darío Cadena



PRESENTACIÓN

La guerra lleva décadas asistiendo a las escuelas rurales y marginales de Colombia. Pasea desparpajadamente por sus pasillos, sus huertas, sus canchas, sus salones, mientras lanza gritos amenazantes a docentes y directivos para que abandonen las instituciones. Vestida de militar estatal, guerrillera o paramilitar se atrinchera tras los muros escolares; y, sin asomo de vergüenza, establece campamentos bajos los techos académicos. No le importan las reglas internacionales, por ello intenta cada día seducir a los escolares para que integren sus filas; en otros casos, los amedrenta con el apabullante sonido de las armas y con las minas antipersonal que deja en los caminos que conducen a las aulas.

La guerra, omnipresente en Colombia, persigue a los menores a sus hogares para, entre otras acciones reprochables, extorsionar, amenazar, torturar y/o matar a sus familias. La única forma de evitar la suma de tragedias es la migración, que implica, además de los efectos del desarraigo, el abandono temporal o definitivo de la institución educativa.

Esa ruta de violencia la han recorrido, entre enero de 1985 y diciembre de 2015, aproximadamente, 1.901.011 personas que, según la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años*.

Por cuestiones como las nombradas, Colombia se encuentra en el grupo de 30 países clasificados y observados desde 2009 por la Global Coalition to Protect Education From Attack. Del continente americano, también México se encuentra en el listado. Sin embargo, el caso colombiano es crítico por las más de 50 décadas que cumple este conflicto armado, en

el que nunca se han respetado las normas internacionales que velan por la protección de los menores y su derecho a la educación. Argumento de ello es el registro de 4.737 personas que declararon haber sido víctimas del reclutamiento infantil entre 1985 y 2015, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Además, entre los análisis que hizo la Unesco en 2011 sobre el proyecto del milenio Educación para todos, encontró que los países en los que más se dificulta eliminar los índices de analfabetismo es en aquellos que viven cualquier tipo de conflicto armado, dado que en ellos los recursos económicos se destinan prioritariamente para sostener la guerra. En el caso de Colombia, según el estudio *Cuánto nos cuesta la Guerra* (2012), el Estado invierte en cuestiones bélicas, aproximadamente, 21 billones de pesos anuales. Todo lo descrito conduce a la pregunta por el impacto del conflicto armado en la educación – sus costos sociales y económicos- y conlleva a pensar en la necesidad de fijar la mirada en un tema nombrado constantemente pero poco explorado. Resaltan en este campo los estudios de organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales sobre el reclutamiento infantil. Pero estudios holísticos sobre el tópico en cuestión no son fáciles de encontrar en los anaqueles físicos y digitales, pese a que el conflicto armado es un tema en boga en medios masivos, especializados y académicos, por cuenta del proceso de paz que se lleva a cabo entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Por consiguiente, el proyecto que acá se presenta encara el tema de la educación en el marco del conflicto, en tanto campo sustancial para el progreso de cualquier sociedad y, paradójicamente, lugar poco



común en los análisis estatales sobre las consecuencias de la guerra, tal como lo argumenta la Unesco en el documento *Una crisis encubierta. Conflictos armados y educación* (2011):

“No es frecuente que la educación figure en la evaluación de los daños causados por un conflicto. La atención de la comunidad internacional y de los medios de comunicación suele centrarse en las imágenes más inmediatas que muestran el sufrimiento humano, no en los costos ocultos y las secuelas duraderas de la violencia. Pero en ningún otro ámbito son esos costos y esas secuelas más evidentes que en el sector educativo.”

En consecuencia, el proyecto *La guerra va a la escuela* tiene como objetivo central, en su primera fase, comprender los costos sociales y económicos que el conflicto armado colombiano ha dejado en la educación básica y media en los últimos cinco años (2010-2015). Para comprender mejor el fenómeno se analiza la situación del departamento de Putumayo, una de las regiones más golpeadas históricamente por grupos armados contra-estatales.

El proyecto, además, parte de una apuesta por hacer investigación periodística desde la academia, siguiendo las directrices de la investigación de las ciencias sociales, mediante los lineamientos metodológicos del periodismo de datos. La organización colombiana de periodistas Consejo de Redacción explica que “el periodismo de datos plantea una nueva manera de narrar las historias. Antes reinaban los estilos discursivos tradicionales: explicación, descripción, narración y argumentación. Ahora se complementan con las herramientas que proporcionan los medios digitales para analizar en profundidad y corroborar o comprobarlo casi todo” (2014. p. 92). Además, implica la presentación de la información por medio

de herramientas propias del diseño gráfico, cuyo fin es permitir a los usuarios de la información entender la realidad de un fenómeno mediante datos cuantitativos y cualitativos.

Uno de los resultados es un producto multimedia que fue presentado en la plataforma digital del diario colombiano *El Espectador*, entre el 4 y el 5 de abril de 2016. En aras de alcanzar otros públicos, se entrega este documento que contiene los resultados de la primera parte de la investigación; trabajo que parte de una apuesta pedagógica, pero con el que se aspira contribuir a la construcción de verdad, que es una prioridad en sociedades golpeadas por la guerra.

Referencias

- Castellanos Díaz, J. (2012). *Cuánto nos cuesta la guerra*, Bogotá: Editorial Politécnico Gran colombiano.
- Morelo, G., Castrillón, G., & Behar, O. (2014). *Pistas para narrar la paz: periodismo en el posconflicto*. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer y Consejo de Redacción.
- Unesco (2011). *Informe de seguimiento de la Educación para todos en el mundo*.

* Es importante anotar que por fuera de la cifra quedan todas las personas que aún no se atreven a contar su caso en las oficinas estatales.





LA GUERRA VA A LA ESCUELA

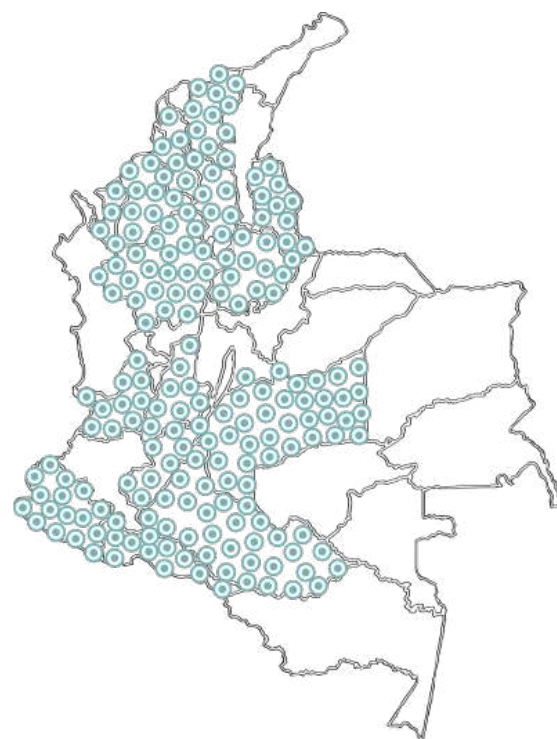


CONTEXTO

Entre el primero de enero de 1984 y el primero de diciembre de 2015 se cuentan, aproximadamente, 1.901.011 personas que vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Según información de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del número expuesto, 4.737 menores debieron distanciarse de las aulas porque fueron reclutados en las filas de grupos al margen de la ley; sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reporta que entre 1999 y 2015 atendió a 5.850 menores víctimas del mismo flagelo.

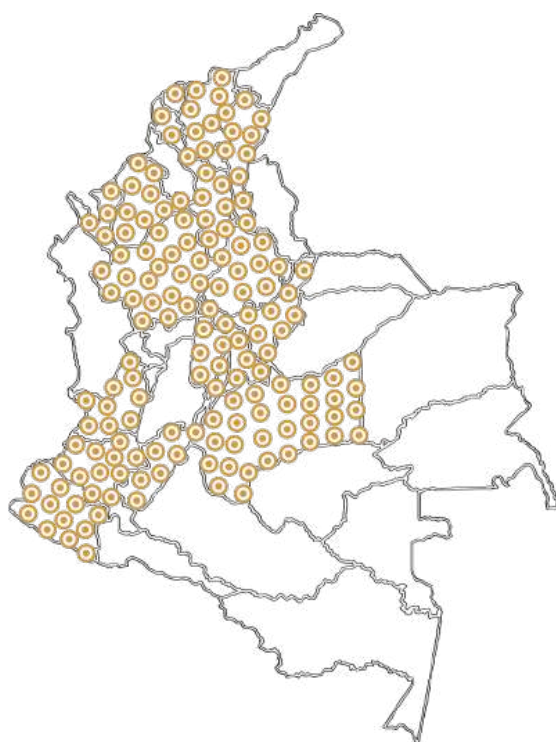
El paso de la guerra por la escuela también deja maestros desaparecidos, desplazados, exiliados, amenazados

y asesinados. Escuelas afectadas en su estructura por el impacto de balas y elementos explosivos; minadas y tomadas como trincheras durante combates o como lugares de campamento por grupos armados legales e ilegales. Y, de cara a toda esta escena, familias de zonas rurales que han decidido que sus hijos no recorran el camino a las aulas para evitar que sus nombres sean fijados en las listas de víctimas. Los siguientes mapas permiten visualizar los departamentos que registran en 2015 altas tasas de matrículas oficiales de desplazados, hijos de desmovilizados y víctimas de minas anti-personal. La información es resultado del análisis de datos que presenta el Ministerio de Educación Nacional.

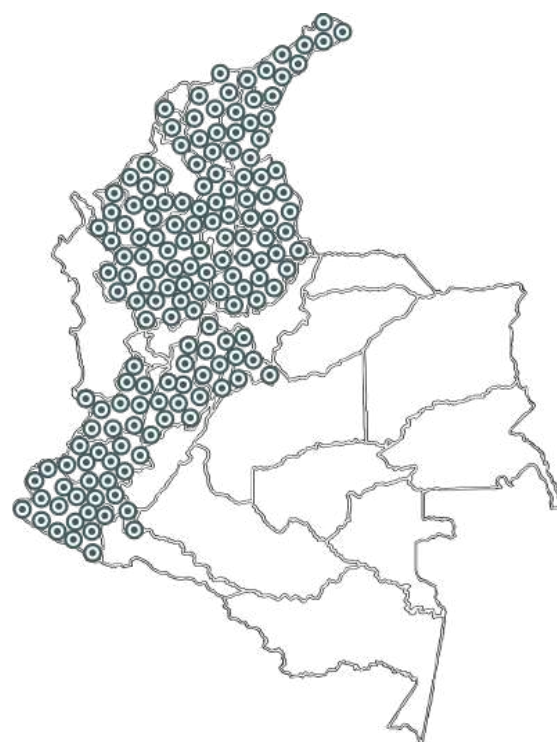


- Desplazados
- Hijos de desmovilizados
- Víctimas de minas antipersonal

Antioquia-Bolívar-Caquetá-Córdoba-Huila-Magdalena-Meta
 Nariño-Norte de Santander-Putumayo-Santander-Sucre
 Tolima-Valle del Cauca



Antioquia-Atlántico-Bolívar-Boyaca-Cauca-Cesar
 Córdoba-Cundinamarca-Huila-Magdalena-Meta
 Nariño-Santander-Valle del Cauca

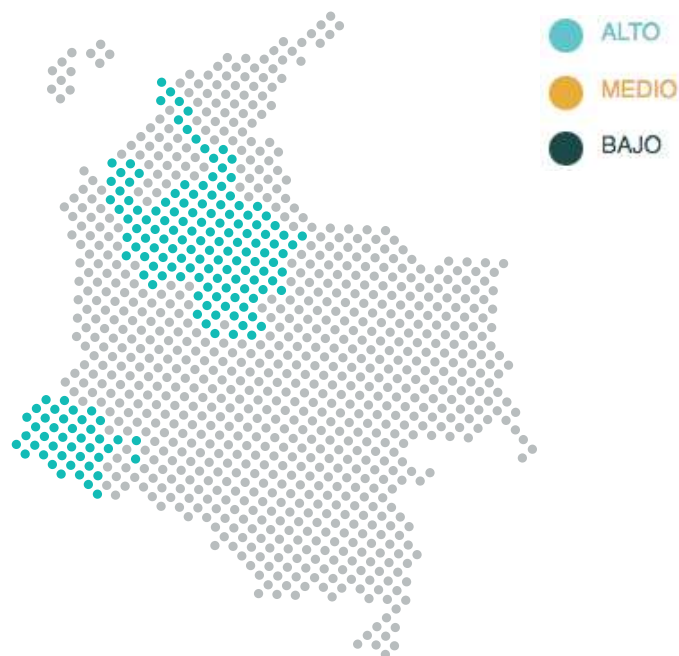


Antioquia-Bolívar-Cauca-Cesar-Córdoba
 Cundinamarca-La Guajira-Magdalena
 Norte de Santander-Nariño
 Santander-Tolima-Valle del Cauca

Educación para las víctimas

Finaliza el tercer lustro del siglo XXI y el país aún no cuenta con una cobertura total en educación. Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por cuenta, sobre todo, de la fuerte presencia de grupos armados ilegales y la ausencia parcial o total del Estado. Y en las zonas urbanas se detecta la necesidad del componente educativo para las víctimas que llegan huyendo de la guerra. En los siguientes mapas se exponen los lugares del país en los que se precisa de mayor oferta escolar para las víctimas. La información se toma del documento público Lineamientos para la regionalización de proyectos de inversión nacional dirigidos a la atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado. DNP.

Esta clasificación define tres categorías que son alto, medio y bajo. Alto representa la mayor necesidad del componente educación para las víctimas, seguido por las otras dos categorías.



Antioquia-Bolívar-Boyacá-Cundinamarca
Nariño-Santander



Caldas-Cauca-Cesar-Chocó-Córdoba-Huila-Meta
Sucre-Tolima-Magdalena-Norte de Santander
Valle del Cauca



Amazonas-Arauca-Atlántico-Bogotá-Caquetá
Casanare-Guainía-Guaviare-La Guajira-Quindío
Putumayo-Risaralda-Vaupés-Vichada

“Cada sociedad es el resultado, en cierto sentido, de un modelo educativo”:

IVÁN CEPEDA

La educación es un tema tímido dentro de la agenda del proceso de paz que se desarrolla en Cuba. No obstante, en un escenario de postconflicto deberá ser un tópico fundamental. Iván Cepeda, Copresidente de la Comisión de paz del Senado de la República, reflexiona sobre el tema en la siguiente entrevista.

¿La Comisión de Paz del Senado de la República ha considerado el impacto del conflicto armado en la educación?

Yo llamo la atención sobre una exigencia que ha hecho la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, quienes han hablado de esa relación entre guerra y educación, lo que lleva a pensar que es necesario que aquí se produzca una transformación radical. Es importante que volquemos muchos recursos y potencialidades hacia la educación. Si uno observa las estadísticas, lo que dicen es que de cada diez víctimas, seis son personas de origen rural. Regularmente campesinos y campesinas a quienes se les ha negado el derecho a la educación. En la gran mayoría de los casos son personas que han sido desplazadas una y otra vez. Eso lleva a pensar en la pobreza, en la falta de recursos económicos y la dificultad para acceder a sistemas formales de empleo, de salud, y, por supuesto, de educación.

Si es claro que uno de los derechos vulnerados a las víctimas del conflicto armado es el acceso a la educación, ¿cuál es su opinión frente al presupuesto asignado a este sector en Colombia?

Una sociedad para la paz requiere dar un giro radical frente al problema de los presupuestos hacia la educación. La sociedad colombiana sigue siendo una sociedad volcada a la guerra, a darle cada vez más recursos al aparato de la violencia. Si este año el presupuesto asignado a educación superó por muy poco al sector defensa, eso no significa que hayamos superado ese desbalance.

¿Cuál es el papel que deben cumplir las instituciones educativas en un escenario de postconflicto?

Para transformar esta sociedad todo depende de los esfuerzos, de cuánta voluntad y cuánta acción se tenga. No hay que olvidar que una sociedad que ha vivido tanto en la violencia y en la destrucción, va a requerir de mucho tiempo para poder recuperarse y relanzarse hacia horizontes distintos. Pero todo depende del nivel de compromiso con el que los dirigentes políticos, las élites, pero también cada ciudadano asuma esta realidad. Yo creo que sobre todo quienes han tenido la posibilidad de formarse deberían involucrarse activamente en este proceso.

Si yo fuera hoy rector de una universidad, estaría diseñando las políticas para involucrar mi institución en el proceso de paz, en el cumplimiento de los acuerdos, en el impulso de investigación útil para la paz y en el proceso de involucrar a los jóvenes para la construcción de paz. Aquí en el Congreso hemos elaborado un proyecto que es el Servicio Social Alternativo, es decir, que los jóvenes se involucren en tareas de paz. La academia, los colegios, las universidades y los centros de pensamiento pueden jugar un papel muy importante en este aspecto.

Hablemos de los desmovilizados que tendremos si se firma un acuerdo con las Farc, ¿cuál será el rol de ellas en la sociedad en términos educativos?

Yo creo que valdría la pena pensar, además de cómo se vinculan los desmovilizados en la sociedad y qué oportunidades tienen, en cómo las personas escuchan sus experiencias. En la academia se

deberían recibir para escuchar las experiencias de personas que han sido guerrilleras, que han estado en el ejército, que han sido paramilitares, etc. No se trata simplemente de verlos como personas que necesitan una capacitación, sino que podemos aprender de estas historias.

¿Cuáles son las preguntas que, desde su experiencia y perspectiva, deberían hacerse hoy los colombianos de cara al impacto del conflicto armado en la educación?

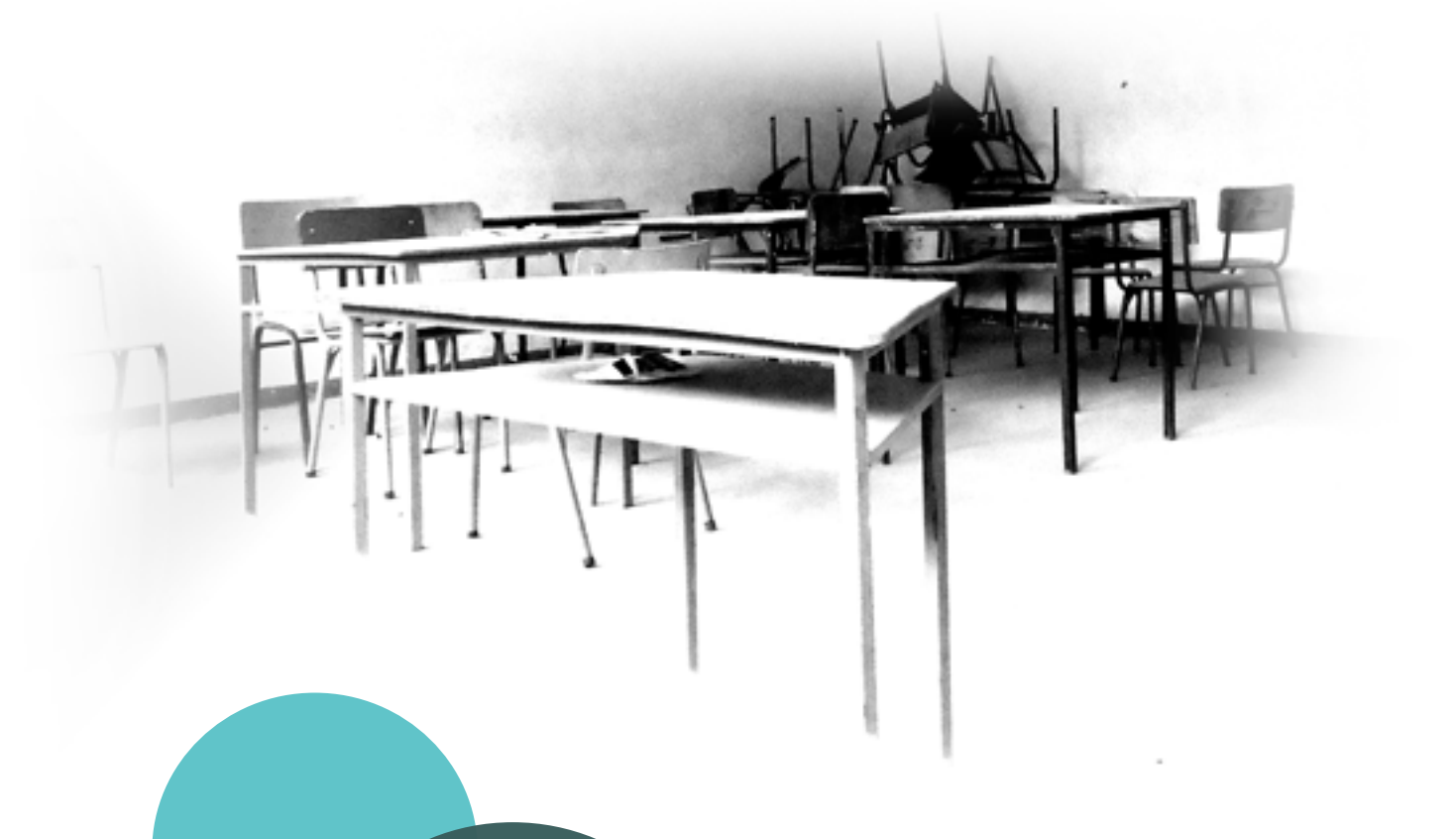
En la Comisión de Paz hemos tenido distintas discusiones sobre el tema de pedagogía, cultura y paz. Pero efectivamente necesitamos una reflexión mucho más detenida sobre cómo el sistema educativo -los procesos educativos formales e informales- está en el corazón de lo que puede ser un cambio de la sociedad colombiana de décadas de violencia, a una situación de finalización de la guerra y de la violencia armada. Debemos hacernos las preguntas correctas: ¿Cómo la educación incide en la violencia y cómo la violencia incide en la educación? ¿Qué educación hemos practicado para que el conflicto haya permanecido tanto tiempo? ¿Hay algún tipo de omisiones o de hechos que se han presentado en el sistema educativo, que han permitido que la violencia se desarrolle y se mantenga? ¿Es la indolencia del Estado por desarrollar la educación en general y por dedicar el presupuesto más a la defensa o a la seguridad, un factor que ha permitido que la guerra prime en la sociedad colombiana? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer para generar una educación para la paz? Se necesita una politización, en el buen sentido de la palabra, de los jóvenes, de los educadores y de los investigadores que nos permita avanzar en todos estos terrenos.

Una de las preguntas que usted formula en la respuesta anterior sugiere que la violencia que Colombia ha vivido puede ser consecuencia de la educación. ¿Podría explicar esta postura?

Cada sociedad es el resultado, en cierto sentido, de un modelo educativo. Hay modelos educativos más adaptativos, más destinados a ciertos énfasis. Yo creo que el modelo que tenemos de educación en Colombia prepara a los jóvenes, a las personas que se educan, más para una sociedad individualista y de competición, y descuida una educación más solidaria. Es por eso que necesitamos una sociedad más volcada hacia el ser humano, sus derechos, hacia el pensamiento crítico, a no dejar que los derechos se vulneren y a exigirlos como tal. Así que hay asuntos que hay que pensar, y quienes tienen que hacerlo son los que están en el sistema educativo y los dirigentes políticos que toman decisiones en el Congreso, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial que atañen a la educación.





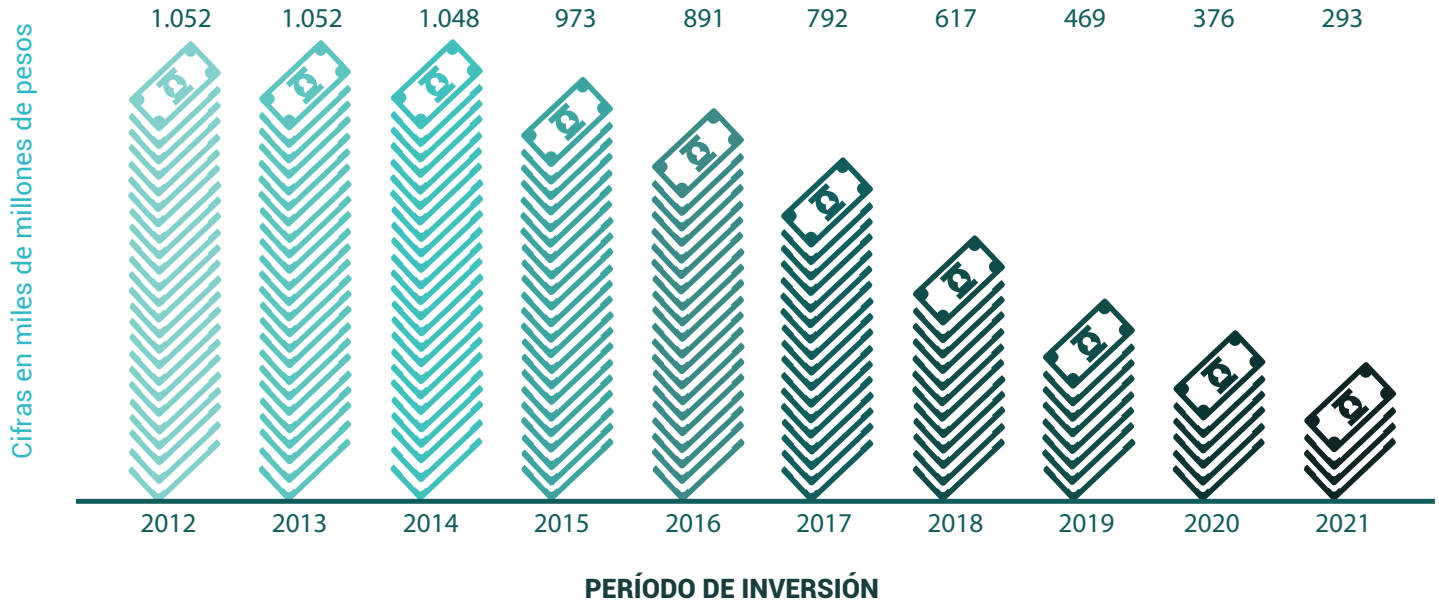


COSTOS

Tras la aprobación de la Ley de Víctimas, el Estado designó 6,7 billones de pesos para garantizar, entre el año 2012 y el año 2021, el acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar víctimas del conflicto armado. El presupuesto debe garantizar educación gratuita y la eliminación de otros costos académicos diferentes a la matrícula. No obstante, personas desplazadas entrevistadas para esta investigación manifiestan que cuentan con la matrícula, pero que carecen de aportes que cubran todos los gastos escolares.

Del monto expuesto también deben salir recursos para la población víctima entre los 18 y 25 años que no hayan culminado la educación básica y media, según el Conpes 3712 de 2011.

*Costos para
el restablecimiento
del derecho a la educación
de las víctimas*

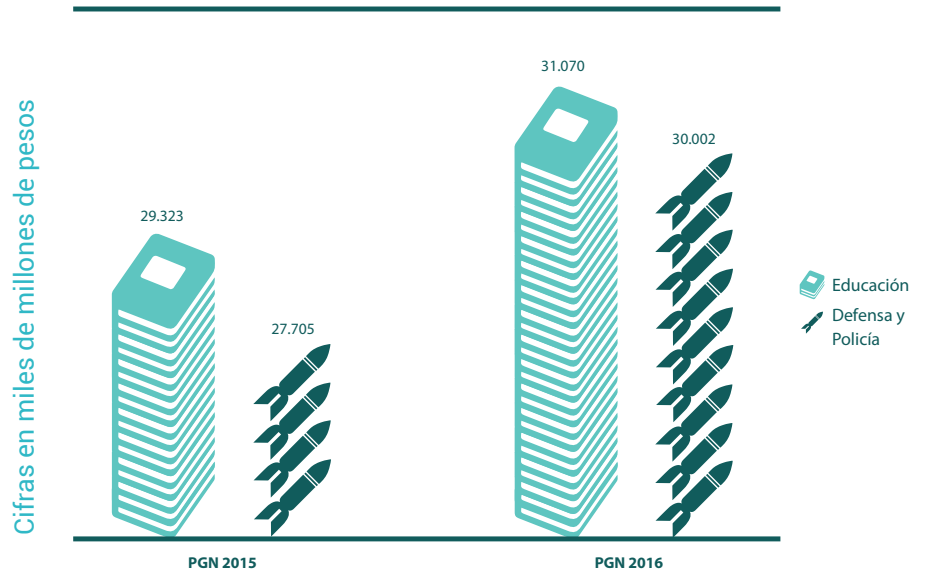


PRESUPUESTO HISTÓRICO

Según el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2016, al sector educativo le corresponden 31 billones de pesos. La cifra es histórica por ser la más alta entregada al sector y porque supera, por segundo año consecutivo, los recursos asignados al sector Defensa y policía. No obstante, ningún gobierno de turno podrá asegurar un destino diferente al que la educación ha vivido, hasta que el conflicto culmine realmente, es decir, más allá de la firma de un acuerdo de paz.

De ese monto, manifiesta el Ministerio de Hacienda, 8,7 millones de estudiantes de instituciones oficiales contarán con educación gratuita; educación a la que accede la mayor parte de la población en edad escolar víctima del conflicto armado.

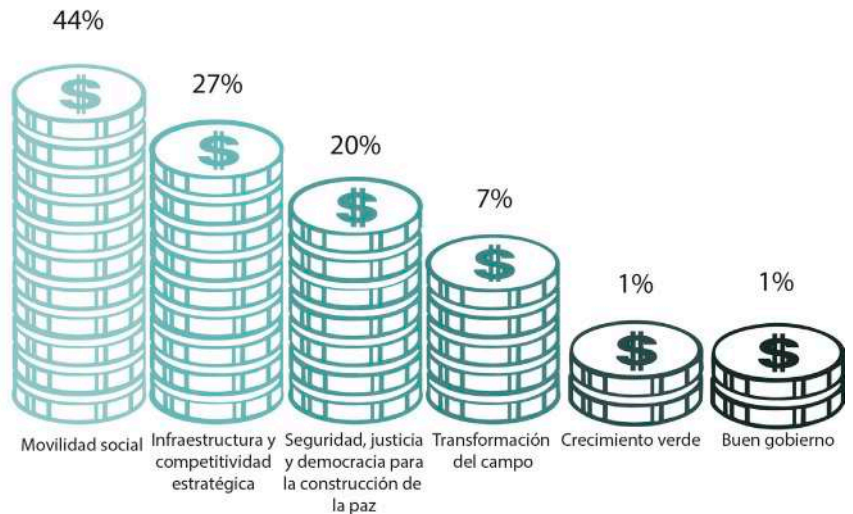
COMPARATIVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EDUCACIÓN Y DEFENSA 2015 - 2016



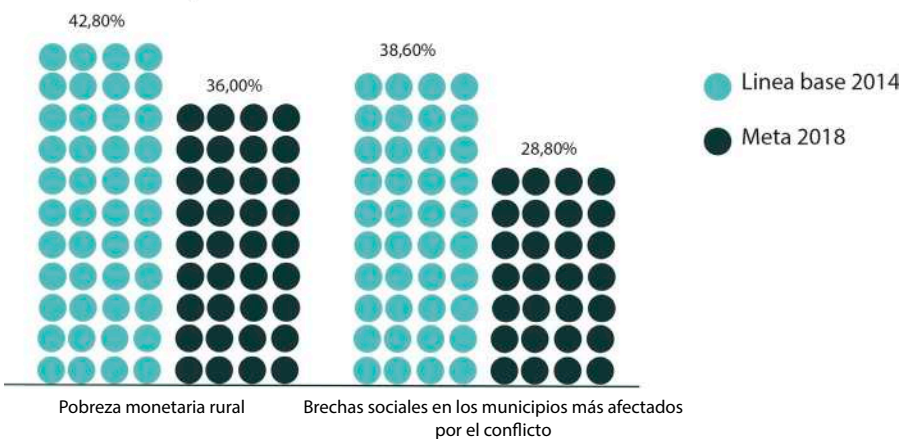
DISMINUIR LAS BRECHAS EN EDUCACIÓN

El 44% del Plan Plurianual de Inversiones (PPI), de la vigencia 2014-2018, corresponde a la estrategia que el gobierno ha denominado Movilidad Social. El porcentaje equivale a 310,4 billones de pesos, de los cuales el 44% se destinan para cerrar las brechas en acceso y calidad de la educación. Esto incluye, entre otras cosas, la atención a la población víctima del conflicto armado en edad escolar, así como la cobertura en educación primaria y media en las zonas rurales afectadas, en un alto porcentaje, por los grupos armados ilegales.

Presupuesto para mejorar el acceso y la calidad a la educación (2014 - 2018)



Metas del gobierno nacional para la reducción de la pobreza en áreas rurales



El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 expone en términos porcentuales las brechas económicas y sociales de las regiones más afectadas por el conflicto armado, que corresponden, en su mayoría, a zonas rurales. Presenta, en consecuencia, la meta que, de cara a las categorías mencionadas, se propone cumplir el gobierno a partir de su política de paz, equidad y educación. Tanto la pobreza monetaria rural como las brechas sociales en los municipios más afectados por el conflicto armado requieren de inversión en educación, para que les permita a sus habitantes construir proyectos de vida de mayor solidez. Países de la región, como Chile, han demostrado que la educación es una de las vías más certeras para alcanzar altos niveles de igualdad social que se traducen, en el largo plazo, en reducción de la pobreza.





VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EDAD ESCOLAR

Al cierre de esta investigación se encontraban registradas en Colombia 7.821.641 víctimas del conflicto armado. El 24% de ellas vivió un hecho victimizante cuando se encontraba en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Para los expertos en educación consultados, cualquier hecho de violencia que repercuta sobre un menor tiene entre sus consecuencias la alteración de la vida académica.

Total víctimas del conflicto armado en edad escolar 1984-2015



Datos a 1 de diciembre de 2015

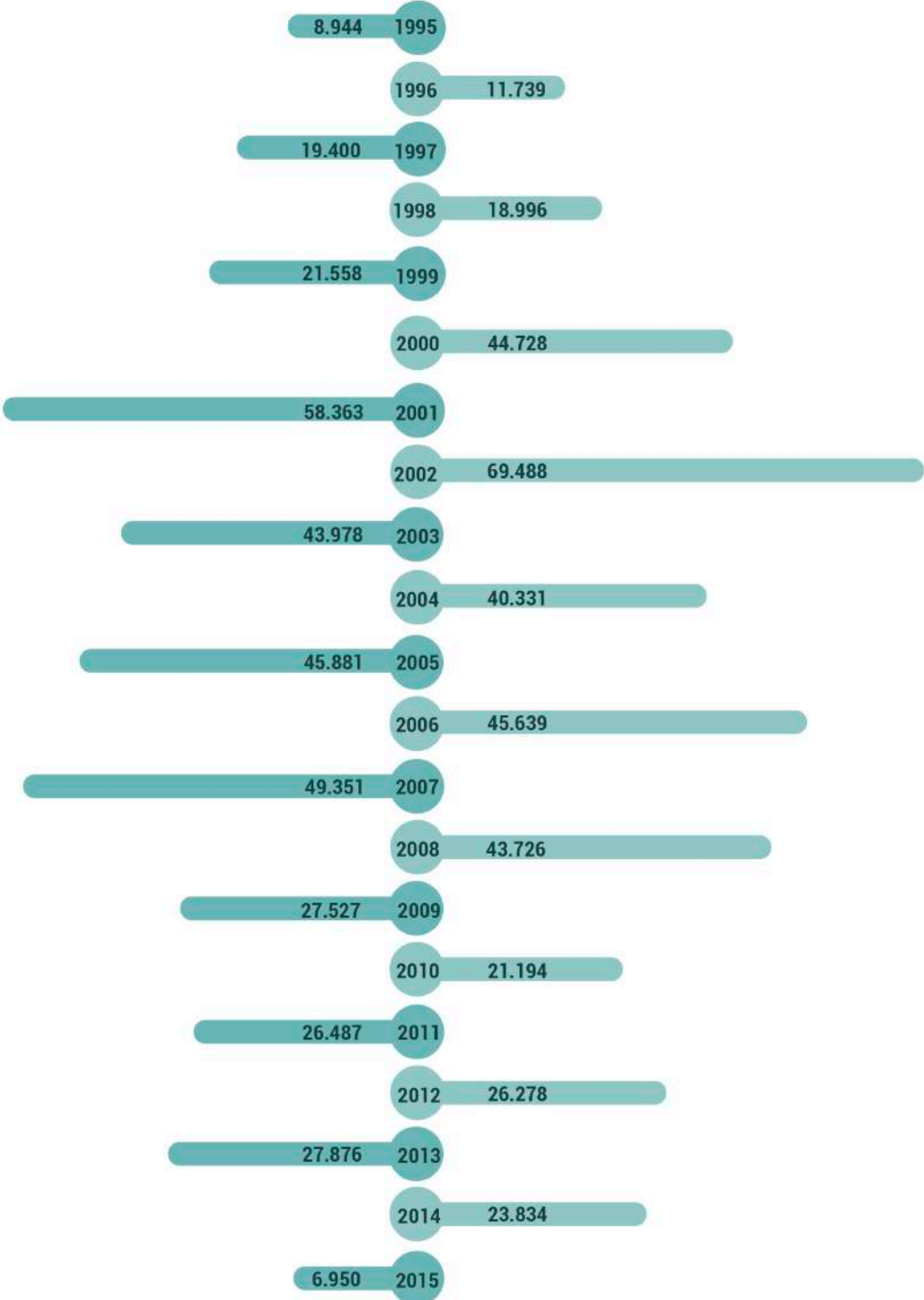
HISTÓRICO VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EDAD ESCOLAR

6 a 12 Años



HISTÓRICO VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EDAD ESCOLAR

13 a 17 Años



“La ley de víctimas solo está en el papel, y no hay alternativas de educación”:

LINA ORTIZ

Lina Ortiz, víctima del conflicto armado, relata en esta entrevista cómo se cruza por el sistema escolar con una prótesis, que le recuerda en cada paso las zancadillas que coloca la guerra.

¿En qué momento su nombre empieza a aparecer en las listas de víctimas del conflicto armado colombiano?

A los trece años fui a visitar a mi papá, quien era miembro de la policía, a un municipio que se llama Saladoblanco, al sur del Huila. Nos encontrábamos mis dos hermanas, mi mamá y yo, aproximadamente a las 9:30 pm, en la estación de la policía, cuando unos subversivos de las Farc entraron en dicho puesto. Dentro del enfrentamiento, uno de los artefactos explosivos incursionó en mi pierna derecha destruyéndola en su totalidad. Dos horas después intentamos salir de la estación pero los guerrilleros ya tenían el control de todo el lugar. Finalmente encontramos la forma de salir, y llegamos a un centro de salud muy pequeño para que me atendieran. Lastimosamente el médico del pueblo no estaba, y tampoco había medicamentos. Entonces, llegó un señor que estaba de visita y dijo que era médico. Él me prestó los primeros auxilios, pero ya no había nada que hacer con mi pierna.

¿Qué tan fácil fue el reintegro al sistema educativo, luego del episodio narrado?

La vida me cambió bastante. Tuve problemas para ingresar a un colegio público porque no cumplía con las mismas actividades que hacía cualquier otra persona de mi edad. Luego tuve la oportunidad de estudiar en un colegio privado donde sí entendieron mi situación. Fui seis meses en muletas porque en ese entonces la policía no me suministró la prótesis que requería, por lo que tuve que hacer muchos trámites para que me dieran mi primera prótesis.

¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado para acceder a la educación?

La Ley de Víctimas solo está en el papel y no hay alternativas de educación. Si hoy yo quiero seguir estudiando no voy a poder hacerlo si no es a través de la educación privada. Además, tengo que asumir los costos. Yo lo he intentado a través de créditos educativos del Icetex, donde hay condonaciones de intereses, pero es muy difícil. Se tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos y con uno que no cumplas pierdes la oportunidad automáticamente.

Por lo que manifiesta es evidente que siente inconformidad frente a la Ley de Víctimas, ¿qué considera usted que le hace falta a la citada ley?

Para mí es muy importante la rehabilitación integral de una víctima. No solamente es darle una prótesis y presentarlas a la sociedad. Debe haber un acompañamiento psicológico, y en el plano educativo, en salud y en lo laboral. Uno quiere tener los medios para poder salir adelante y no que la misma sociedad y el mismo Estado lo limite a uno por el hecho de ser una víctima o tener una discapacidad.



“Cuando la fuerza pública también ocupa la escuela, el lugar se convierte en objetivo militar para la guerrilla”:

JORGE CALERO

En Colombia la guerra se pasea descaradamente por los pasillos de las escuelas rurales. Los niños de Putumayo, Cauca, Antioquia, Nariño, entre otros departamentos, conocen la fuerza de sus pasos. Jorge Calero, Defensor delegado para la prevención de riesgos de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Defensoría del Pueblo, explica por qué ocurre esto y, además, cómo los estudiantes terminan siendo instrumento del conflicto.

¿Desde el sistema de alertas de la Defensoría del Pueblo, cuáles son las formas de violencia contra la escuela que más evidencian en el marco del conflicto armado?

Frente a la educación como derecho observamos que el impacto es grande viéndolo desde la perspectiva de cómo los actores armados ilegales tratan de realizar acciones violentas que vulneran bienes civiles como las escuelas. Al atacar las escuelas, que son bienes civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, docentes y niños terminan siendo víctimas. Como derecho fundamental, entonces, se ve un impacto en el acceso, la calidad y la permanencia de los niños en el sistema educativo, por el riesgo permanente de sufrir ataques, atentados, presiones e intimidaciones por parte de grupos ilegales que son la fuente generadora de riesgo.

¿De qué manera los grupos armados ilegales intimidan a los menores de edad y con qué fin lo hacen?

En zonas rurales, la mayor presencia de los grupos armados ilegales son las guerrillas, llámense Farc, ELN o la disidencia del EPL. Esas guerrillas encuentran en las escuelas el recurso humano que favorece sus fines, como el fortalecimiento de las filas. Para esto deben atraer a los niños, seducirlos para vincularlos como combatientes de estos grupos irregulares. Y la escuela, que es el entorno protector, también obviamente resulta siendo objeto del asedio de estos grupos, ya que ingresan a ella, porque buscan a los niños, porque violentan las escuelas. A veces, cuando la fuerza pública ocupa la escuela, el lugar se convierte en objetivo militar para la guerrilla, y los niños quedan en medio de ataques armados. O cuando alrededor de la escuela se siembran minas antipersonal, para evitar que la fuerza pública ocupe la escuela; u ocupándola para que las unidades militares puedan caer en esos campos minados.

¿Además de las guerrillas, tienen ustedes información de cómo otros grupos ilegales llegan hasta las escuelas para vincular a menores de edad a sus organizaciones?

Si bien las Autodefensas Unidas de Colombia o los grupos que el Gobierno denomina Bacrim no realizan ataques armados o minan las escuelas (como sí lo hacen en Colombia los grupos guerrilleros), estas siguen siendo el establecimiento propicio para que ellos puedan contactar a los niños y jóvenes que están allí, para utilizarlos de forma ilícita. Son utilizados para fines como el sicariato, el micro tráfico y labores de vigilancia o inteligencia. Además, les ofrecen armas, motocicletas y medios de comunicación –celulares– para que sirvan de mensajeros. Es otro tipo de violencia contra las escuelas.

¿Cuáles son los departamentos que la Defensoría del Pueblo detecta como zonas alto riesgo por los índices de reclutamiento de menores de edad?

Cauca: en Toribío - y en el norte del Cauca- hablemos de Caloto, Caldone, Jambaló, Buenos Aires, Silvia. En esos municipios se ha dado, de tiempo atrás, fuertes acciones de reclutamiento. Igual en Caquetá, estamos hablando de municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José de Fragua. En Putumayo: Puerto Asís, San Miguel, Puerto Guzmán, Orito. En el Meta en municipios como Mesetas, Uribe, Vista Hermosa y Mapiripán. En Zonas del Guaviare como San José del Guaviare, en Calamar, El Retorno. En la provincia de Ocaña digamos Convención, Teorama, El Tarra, en Norte de Santander. En el Huila, en el Valle del Cauca, en Buenaventura. En Arauca en Tame, Fortul, Saravena. Es muy grande – de verdad- el número de municipios donde se presenta esto.

¿La fragilidad del Estado en las zonas que nombra es la causa de la vulnerabilidad de los escolares?

El elemento de la debilidad del Estado en las zonas rurales es una condición de vulnerabilidad. En muchas veredas y corregimientos- hay que decirlo con mucha tristeza- la única presencia de un uniforme es del actor armado ilegal. Y esa presencia implica control territorial, control social, imposición de normas y conductas. Hay zonas donde a la familia le imponen como cuota entregar un niño a la guerrilla, y si no lo entregan vienen retaliaciones contra la familia.

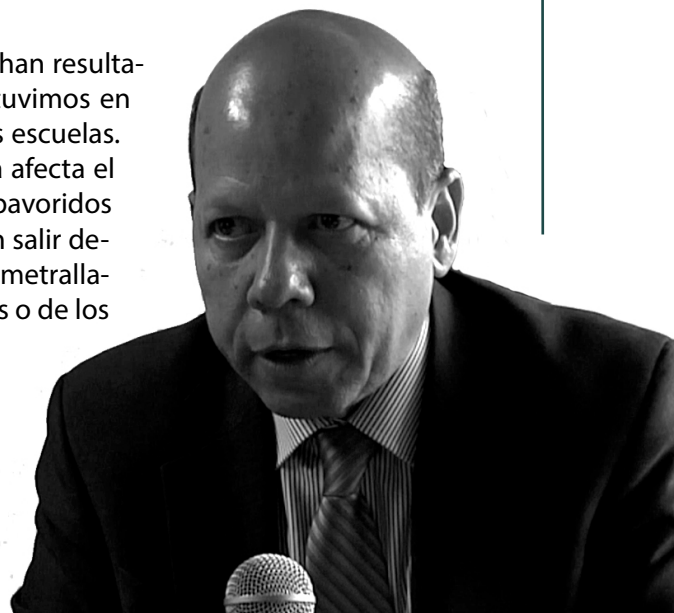
Acá hubo muchos casos de asedio a los albergues, aunque sé que eso ha disminuido. Los albergues son como los sitios donde los niños que viven lejos, en zona rural, duermen durante el fin de semana o entre semana porque no tienen acceso al transporte público para llegar a sus fincas o a sus veredas. Esos albergues fueron durante mucho tiempo asediados por los grupos de guerrilla y otros grupos ilegales para poder adoctrinar a los niños, para invitarlos a la guerra.

¿De qué manera el Ejército también interviene- de forma ilegal- en las escuelas?

La fuerza pública también ocupa las escuelas. Se han recibido muchas quejas de comunidades de diferentes departamentos del país donde se presentan estos hechos. ¿Qué departamentos?: el suroccidente del país hablando de Caquetá, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Igual Chocó, la zona de Catatumbo en Norte de Santander, el departamento de Arauca. La zona de los Llanos Orientales: Meta y Guaviare. Y la zona de Tierralta en Córdoba.

¿Otro de los problemas es la cercanía de las bases militares y las estaciones de policía con las escuelas, qué información tienen sobre esto?

El norte del Cauca ha sido una zona donde los niños y niñas han resultado muy afectados, al igual que en Putumayo y Caquetá. Estuvimos en Inzá- Cauca-, y el puesto de policía está ubicado cerca de dos escuelas. Entonces, cada vez que la guerrilla ataca el puesto de policía afecta el establecimiento educativo. Por eso, los niños deben salir despavoridos de la escuela en un plan de emergencia, y cuando no pueden salir deben esconderse debajo de los escritorios mientras pasa el ametrallamiento o pasa el lanzamiento de los morteros, de las granadas o de los proyectiles de armas de fuego.





RECLUTAMIENTO DE MENORES DE EDAD

La Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta que entre 1984 y 2015 se han declarado como víctimas del reclutamiento infantil aproximadamente 4.737 personas. Se trata de uno de los grandes impactos que el conflicto ha cobrado en la educación, porque mientras la cifra suma para las filas de grupos guerrilleros y paramilitares, resta en las listas de las instituciones escolares; lo que conlleva, lógicamente, a una pérdida de capital humano para el Estado.

Recursos programados para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes 2010-2014 (Cifras en millones de pesos)



En 2010 el Estado generó la política económica para la prevención del reclutamiento de menores de edad, para el período 2010-2014, por un monto de 353.394 millones de pesos, que incluyó recursos entregados por la nación, recursos propios de las entidades y dineros de cooperación. El total general corresponde a 360 mil millones de pesos, cifra que incluye, además de lo expuesto, los costos de funcionamiento de algunas de las instituciones involucradas en la política. El Ministerio de Educación fue la entidad que recibió más recursos para esta acción.

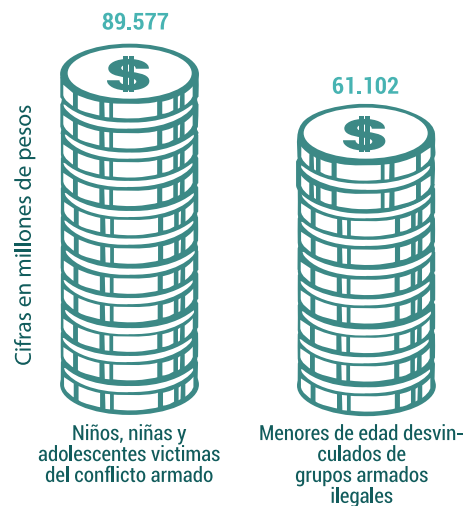
Población desvinculada atendida por el ICBF



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió, entre noviembre de 1999 y agosto de 2015, a 5.850 menores de edad que habían sido reclutados por grupos al margen de la ley.

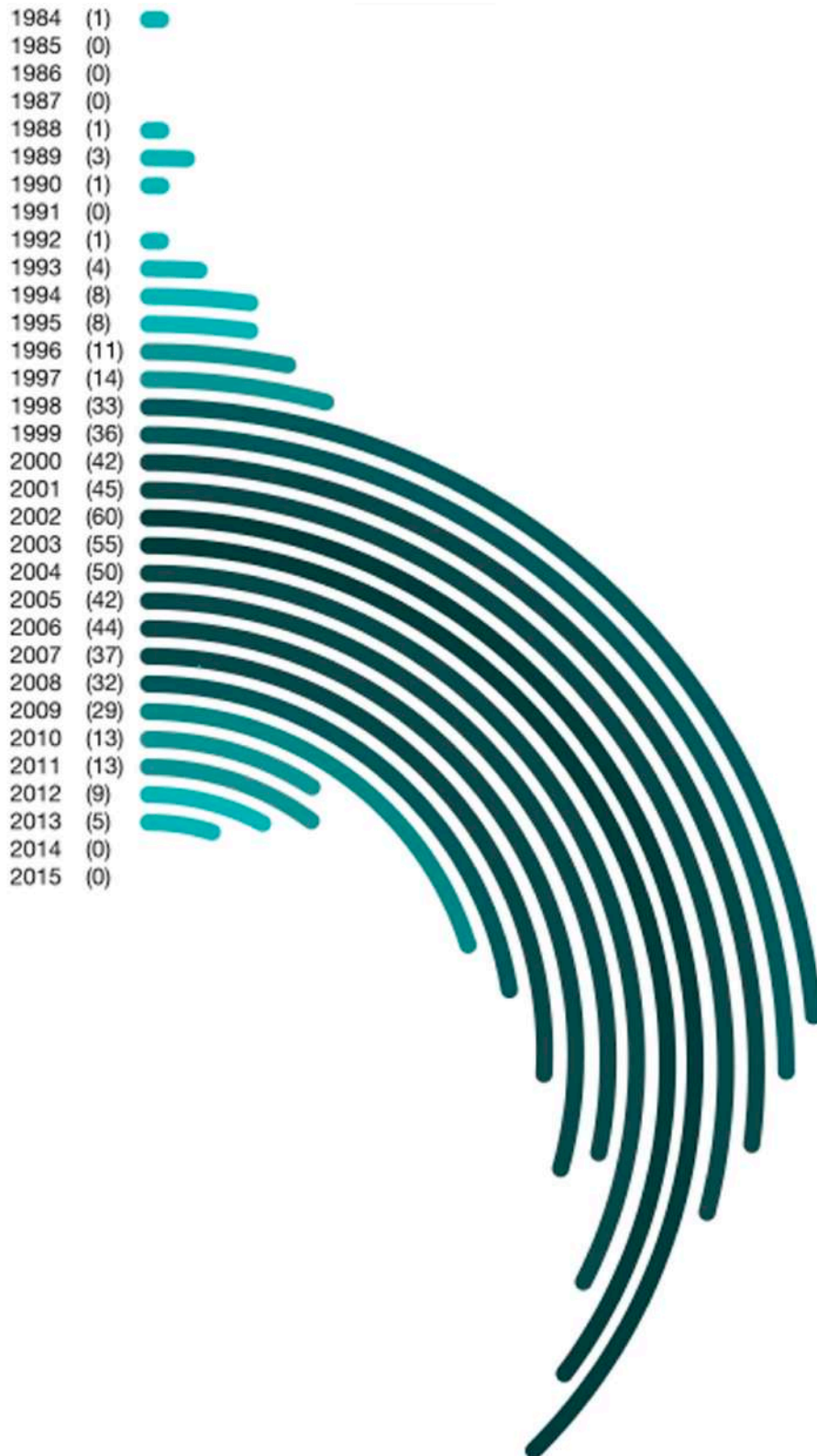
Entre las víctimas desvinculadas se encuentran 547 menores de edad indígenas y 380 menores afrocolombianos.

Inversión ICBF en atención a menores víctimas del conflicto armado (2005-2015)



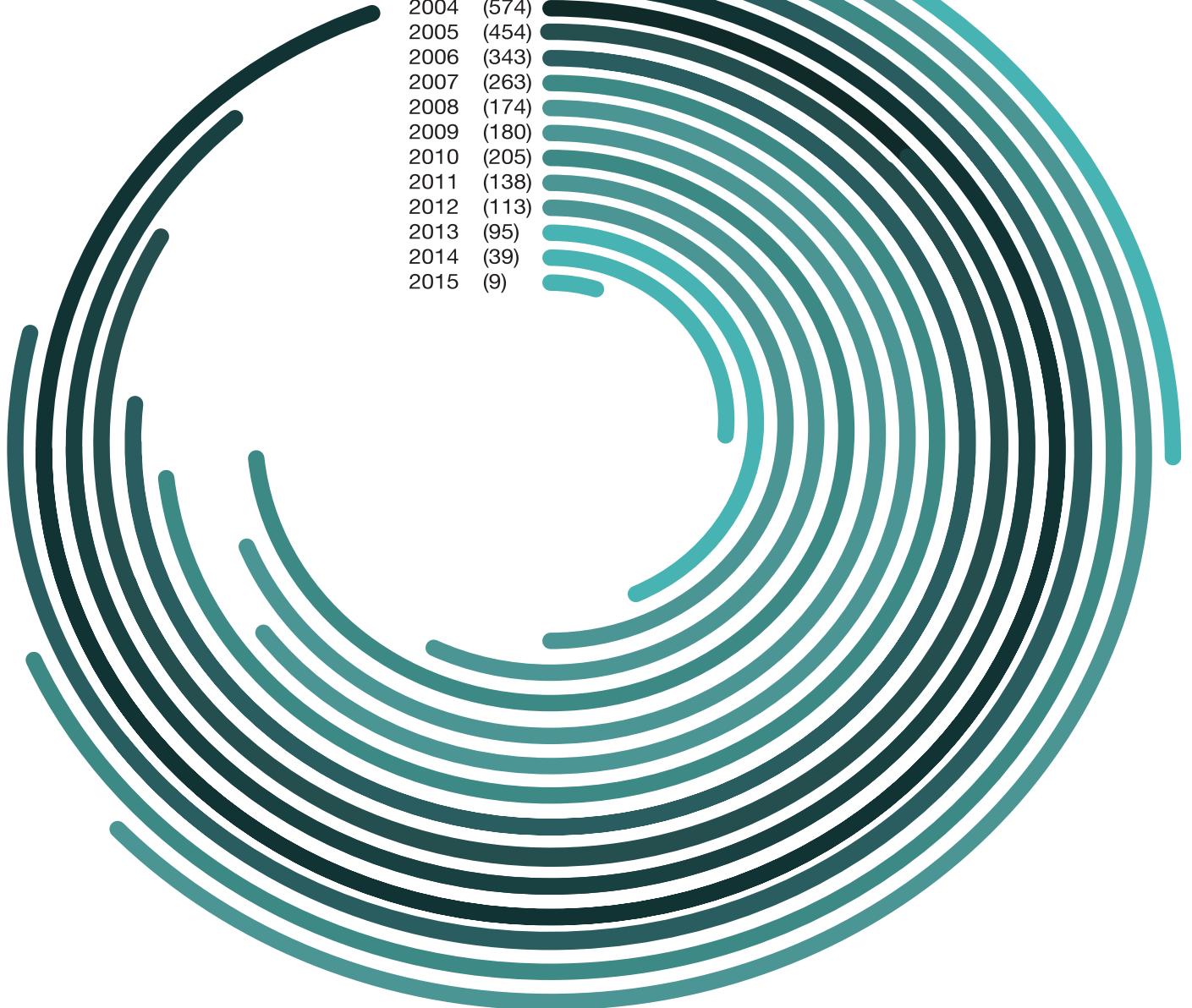
MENORES DE EDAD VINCULADOS CON
ACTIVIDADES DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES

6 a 12 años



13 a 17 años

1984	(2)	—
1985	(0)	
1986	(0)	
1987	(0)	
1988	(3)	—
1989	(2)	—
1990	(4)	—
1991	(2)	—
1992	(2)	—
1993	(3)	—
1994	(6)	—
1995	(13)	—
1996	(9)	—
1997	(12)	—
1998	(18)	—
1999	(60)	—
2000	(171)	—
2001	(227)	—
2002	(392)	—
2003	(627)	—
2004	(574)	—
2005	(454)	—
2006	(343)	—
2007	(263)	—
2008	(174)	—
2009	(180)	—
2010	(205)	—
2011	(138)	—
2012	(113)	—
2013	(95)	—
2014	(39)	—
2015	(9)	—



“Cuando se iban a llevar a los niños nos sacaban a todos los del pueblo a una plazoleta, y allá ellos iban escogiendo”:

SANDRA RODRÍGUEZ

Sandra Rodríguez, víctima del conflicto armado, narra de qué manera las autodefensas se llevaban a los niños de su escondido pueblo.

¿En qué momento se convierte en una víctima del conflicto armado?

Estaban reclutando menores en la zona en la que yo vivía (Pueblo Escondido, Córdoba) y yo me vine porque en ese entonces mi hijo menor que tenía seis años -ahora tiene 16- y era al que se iban a llevar. Además, porque el pueblo donde yo vivía solo tenía una entrada y por ahí mismo entraban y salían las autodefensas. La casa donde nosotros estábamos tenía salida por el mar, y ellos querían el niño y la casa. Entonces yo dejé mi casa pero me traje mis dos hijos.

¿Cómo reclutaban en su pueblo a los niños?

Eso era prácticamente un caserío. Y desafortunadamente allá cuando se iban a llevar a los niños nos sacaban a todos los del pueblo a una plazoleta y allá ellos iban escogiendo a los niños y se los iban llevando. Nunca los escogían por edades sino por altura para que pudieran con el fusil.

¿Qué sucedía si alguien se oponía a que se llevaran a su hijo?

Si uno hacía algo entonces le mataban a la familia. Así que la única opción era quedarse callado.

¿Existe presencia del Estado en esta zona?

Puerto Escondido queda a dos horas de Tierra Alta- Córdoba, y allá queda el campamento mayor de las Autodefensas. El pueblo es manejado por ellos, allá hay Policía y Ejército, pero estos grupos no tienen ley. Después de que hubo toda esa desmovilización llegaron de los Llanos y se volvieron a tomar la zona. Desafortunadamente en estos pueblos no hay trabajo y los hombres lo que hacen es entrar a las autodefensas para conseguir el sustento de sus familias.

¿Qué tipo de ayudas ha recibido por ser víctima del conflicto?

La Fundación Colombia Nuevos Horizontes me ayuda con el techo y la comida, y uno tiene que buscar medios para conseguir las cosas de los niños del colegio.



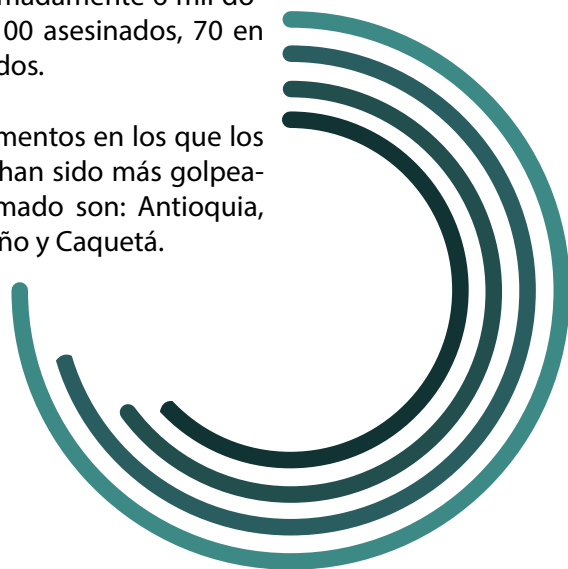




MAESTROS GOLPEADOS POR EL CONFLICTO

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), manifiesta que a la fecha cuentan con aproximadamente 6 mil docentes amenazados, 1.100 asesinados, 70 en el exilio y 50 desaparecidos.

Algunos de los departamentos en los que los sindicatos de docentes han sido más golpeados por el conflicto armado son: Antioquia, Córdoba, Risaralda, Nariño y Caquetá.



- 6 mil amenazados
- 1.100 asesinados
- 70 en exilio
- 50 desaparecidos

“En este pos-acuerdo la educación tiene un reto enorme: pensar qué escuela queremos construir para una sociedad que lleva sesenta o setenta años de conflicto”:

MARÍA CLARA ORTIZ

La escuela rural es un álbum vivo de la guerra. En ella reposan las historias de estudiantes provenientes de familias de víctimas y de victimarios, quienes intentan matizar sus angustias en las aulas. Pero ayudarles no es fácil, porque, entre otras cosas, muchos docentes no se encuentran preparados para tan compleja labor. María Clara Ortiz, experta en el tema e integrante de la Fundación Empresarios por la Educación, explica los retos del sector educativo en un escenario de postconflicto.

¿Podríamos clasificar las formas en que el conflicto armado ha impactado a la educación?

Creo que el conflicto ha llegado a la escuela con todas sus complejidades: con la vivencia que tiene para las familias, con lo que implica para ellas, con lo que se vive en la interacción que ocurre en la escuela, con los maestros que son amenazados y con el temor de hablar de ciertos temas. A la escuela llegan los hijos de los actores del conflicto armado y allí se reproducen esos mismos conflictos. Nosotros tenemos una población que ha sido desplazada históricamente por las distintas guerras, y esa población llega a las escuelas con historias de torturas, desapariciones, masacres, etc.

Usted plantea que a la escuela llegan todas las partes del conflicto armado. ¿Los docentes están preparados para tener en sus espacios académicos a víctimas y a victimarios?

La educación no se agota en la escuela. La tenemos que asumir todos, y esto implica romper imaginarios y paradigmas, y empezar a construir una sociedad en la que todos quepamos y en la que seguramente no habrá olvido, pero sí tiene que haber procesos de reparación, perdón y superación de todos esos estigmas. No creo que los maestros tengan las herramientas para abordar una complejidad de estas, porque recibir hijos de desmovilizados, de reinsertados, de desvinculados del conflicto armado, no es fácil.

En las zonas rurales esas poblaciones tienen una carga de odio y dolor, porque cuando tú has vivido que a tu papá o a tu mamá lo han torturado de una manera salvaje, y llega el hijo de alguien que representa a ese que los torturó, tú tienes que tener la capacidad para abordar algo tan duro y dramático. Cuando has vivido tantas formas de violencia, más la violencia cotidiana, eso es difícil. Es por eso que hablar de la reparación puede sonar muy sencillo, pero es muy complejo. Los maestros necesitan apoyo y acompañamiento, y no es simplemente un psicólogo, sino que debemos replantearnos el rol de cada uno de los que nos involucramos en la escuela.

¿Cuál debe ser el papel de la educación en un posible escenario de posconflicto?

En este pos-acuerdo la educación tiene un reto enorme: pensar qué escuela queremos construir para una sociedad que lleva sesenta o setenta años de conflicto. Y cómo nos reconstruimos nosotros ahí. No creo que sea solo un



tema de atención psicosocial. No es solamente cómo los grupos armados abordan un proceso de verdad y reparación, sino cómo se aborda esto con los hijos, con las familias, con los maestros y con todos los que somos actores del conflicto, bien sea por acción o por omisión. Este proceso no se puede delegar únicamente a los maestros en las escuelas. La comunidad también entra a recuperar un tejido social que se ha roto, y a recuperar la construcción de ciudadanía, de esperanza y de país. Creo que tenemos una oportunidad y un enorme reto de pensarnos ahora, y no de seguir culpando a los grupos armados. Debemos pensar qué país queremos construir, cuál es el rol de la educación en esa transformación y cómo empezamos todos a aportar en ese ejercicio

¿Considera que una cátedra sobre la paz es suficiente como política de educación en el marco del postconflicto?

La educación tiene que mirarse no como una colcha de retazos a la que llegamos con un montón de acciones aisladas. Ojalá superemos la visión de que los problemas en la escuela se superan con cátedras o con charlitas. Tenemos que escuchar la realidad de quienes viven allí, construir con ellos y transformar en el cotidiano los aprendizajes dentro y fuera del aula. Es por esto que no creo que el sistema educativo esté preparado. Hay que reconocer la realidad del otro, no hay que enseñar la convivencia sino vivir la convivencia, y dar herramientas para que la escuela sea un espacio real de ejercicio de la democracia.

¿Existen experiencias en otros países sobre la construcción de paz en las aulas de clases, que puedan tomarse como referencia para Colombia?

Creo que podemos tener experiencias de comunidades y escuelas que han construido con las poblaciones afectadas por el conflicto y las han movilizadas. También hay organizaciones de campesinos que han hecho cosas muy importantes para la paz. Sería importante mirar otros movimientos sociales y experiencias de América Latina, y ponerlas en diálogo con lo que nosotros hemos hecho.

EL SILENCIO ES EL
MEJOR AMIGO DEL
APRENDIZAJE

Idioma Español	Idioma Español	Idioma Español
Idioma Español	Idioma Español	Idioma Español
Idioma Español	Idioma Español	Idioma Español



FELIZ
CUMPLE
AÑOS
SANTI

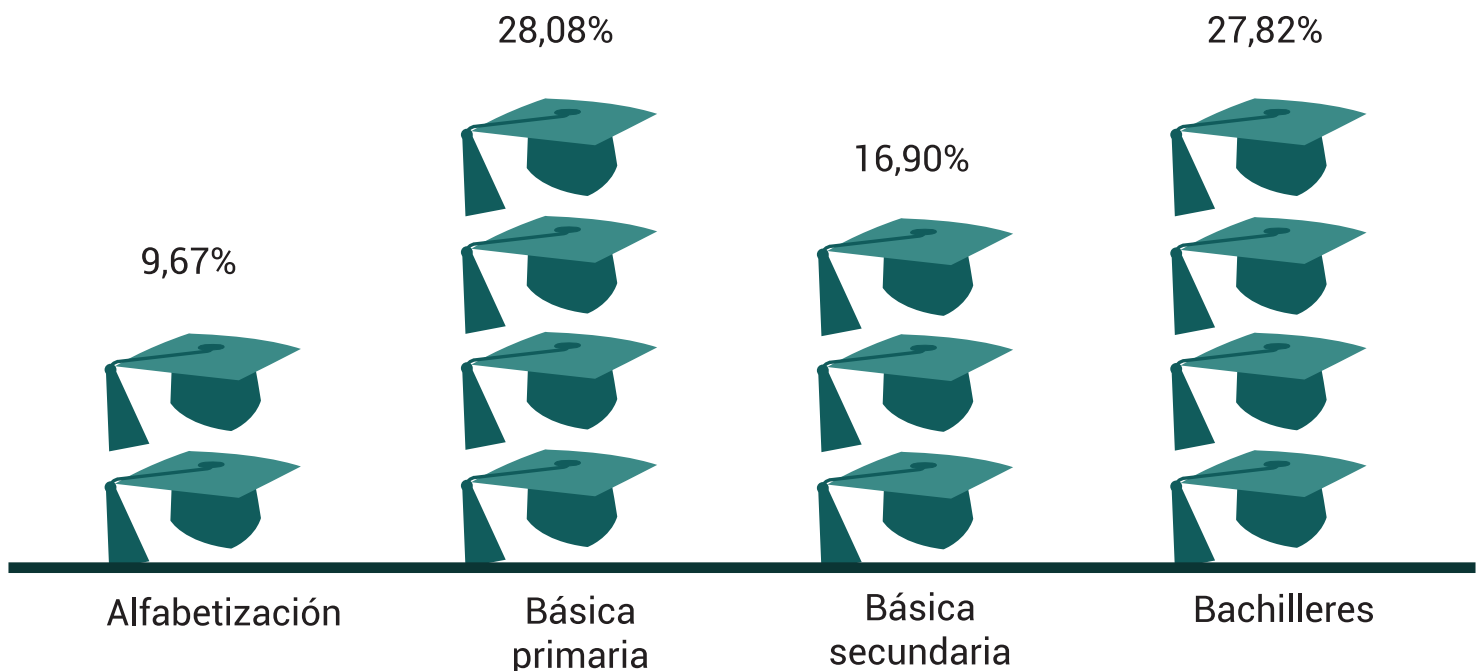
CUARTO



DESMOVILIZADOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

La Agencia Colombiana de Reintegración manifiesta que en los últimos 13 años se han desmovilizado aproximadamente 57 mil personas de grupos armados ilegales. De ese total, 48.358 ingresaron a la ruta de reintegración que el Estado ofrece. La siguiente gráfica muestra el número de desmovilizados que culminaron estudios de alfabetización, primaria y secundaria. Los datos corresponden a septiembre de 2015.

Desmovilizados que han culminado procesos académicos



“El 80% de las personas que llegan provenientes de grupos al margen de la ley, no han terminado básica primaria o son analfabetas”:

NELSON DARÍO VELANDIA

En la lista de temores que cargan las personas que se desmovilizan de grupos armados ilegales está el miedo a no poder emplearse en actividades legales rápidamente. Entre las acciones del gobierno se encuentra una ruta de reintegración en la que el componente educativo es sustancial. Nelson Velandia, asesor de la Dirección Programática de la Agencia Colombiana para la Reintegración, habla del tema.

¿Cuál es el lugar que ocupa la educación en la ruta de reintegración que coordina la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR)?

La educación es el fundamento de la ruta de reintegración. El proceso que hace la Agencia desde el momento que llega la persona es identificar y caracterizarla en todas sus dimensiones. Indagamos con qué nivel de escolaridad viene y, además, qué hizo - en términos académicos- en el grupo armado y antes de pertenecer a él. Este nivel de escolaridad lo medimos a través de unas pruebas que tenemos en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, porque es importante que la persona cuente con habilidades y competencias para mejorar su productividad e incorporarse a la sociedad civil.

¿En qué condiciones académicas llegan las personas desmovilizadas?

De acuerdo con la línea base que tiene la Agencia Colombiana para la Reintegración, el 80% de las personas que llegan provenientes de grupos al margen de la ley, y que se han desmovilizado, no han terminado básica primaria o son analfabetas.

Por otra parte, los que vienen con grados de escolaridad un poco superiores, esos grados ya no son útiles porque estas personas han estado desescolarizadas todo el tiempo que estuvieron en el grupo armado. Por ejemplo, si una persona hizo hasta quinto de primaria antes de entrar al grupo, hoy ese quinto de primaria ya no significa el conocimiento que posee la persona, porque las competencias se han deteriorado y, además, se ha estancado en el tiempo el proceso de aprendizaje. Probablemente esa persona tenga que empezar ciclo I o ciclo II, dependiendo de lo que arroje su diagnóstico. Algunos reciben instrucción en el grupo armado, pero no podemos decir que eso sea una formación o una educación para la vida civil. Entonces el reto que tiene la Agencia es grande.

Ustedes construyeron un modelo de educación para los adultos desmovilizados ¿En qué consiste ese modelo de formación para la reintegración?

Desde el año 2008 la Agencia se dio a una tarea muy grande que fue construir en conjunto con el Ministerio Nacional de Educación, la Fundación Alberto Merani y el Sena, un modelo educativo para la reintegración; una formación que tiene un énfasis en lo que el adulto requiera. Actualmente estamos en un proceso de transferencia del modelo para que sea incorporado como uno de los modelos de oferta de educación flexible para adultos del país, en el Ministerio de Educación. Creo que ese es un valor de política pública que ha construido la Agencia y que le será muy útil al país para el posconflicto y en otros escenarios donde tengamos que reintegrar a personas que hayan estado en contextos de violencia, incluso a víctimas.

¿Qué dificultades han tenido en cuanto al acceso de los desmovilizados a la educación?

No siempre se tiene la cobertura esperada, es decir, ahí existen problemas para que el adulto que es desmovilizado acceda y se mantenga en la educación. Esto sucede porque la mayor parte de las personas que llegan no tienen hábitos de estudio y la permanencia en una institución educativa puede ser compleja. Sin embargo, el Ministerio de Educación y la Agencia trabajan de la mano en las regiones para que las personas puedan acceder, sobre todo, a la educación para adultos. Esto porque no podemos ofrecerle el mismo sistema que recibe un niño en condiciones normales, a una persona que ha estado desescolarizada y que, además, tiene en promedio veinticinco años o más.

¿Cuántos desmovilizados han logrado terminar la ruta escolar?

Se debe tener en cuenta que ingresar a este proceso de reintegración es voluntario, y que si bien queremos que todos los que se desmovilizan lo hagan, aún existe una parte que no lo ha hecho. El número total de desmovilizados son 57 mil en los últimos trece años, de los cuales 48 mil ingresaron al proceso de reintegración. Hoy podemos decir que de esta cifra hay 13.500 bachilleres que han logrado hacer todo el proceso, 4.600 han terminado el proceso de alfabetización, 13 mil primaria y 8 mil básica secundaria. Creemos que las personas lo pueden lograr a pesar de las complejidades que tiene mantenerlos en la ruta de la reintegración.

¿Cuánto le cuesta al Estado esa ruta de reintegración?

Nosotros tenemos un presupuesto anual de aproximadamente 145 mil millones de pesos. Pero nosotros no somos quienes hacemos el proceso educativo, solo nos encargamos de orientar a la persona y brindarle el acompañamiento necesario. Este proceso le cuesta a la Agencia aproximadamente 5 o 6 millones de pesos anuales. Se debe tener en cuenta que una persona que llega siendo analfabeta se puede demorar hasta 6 años en el proceso de reintegración.

¿A qué programas educativos acceden con mayor frecuencia los desmovilizados?

La mayor parte se vincula a ofertas educativas nocturnas o de fines de semana, porque ellos salen con una preocupación y es el tema económico, por lo que hay que tener estas necesidades en cuenta. Por lo general ellos prefieren los modelos flexibles que tiene el Ministerio de Educación, como por ejemplo el modelo Cafam de cartillas y de autonomía en el aprendizaje.

¿Tienen algún tipo de formación para el trabajo?

Para todos los participantes tenemos una orientación para la cualificación ocupacional. Dependiendo del contexto de la persona y de las competencias se hacen concertaciones de cursos de formación para el trabajo con el Sena. Esta formación para el trabajo va de forma paralela con el proceso educativo y en relación con el proyecto de vida del participante, es decir, si la persona quiere ser técnico, tecnólogo o quiere acceder a la educación superior.

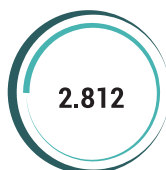




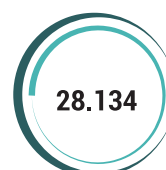
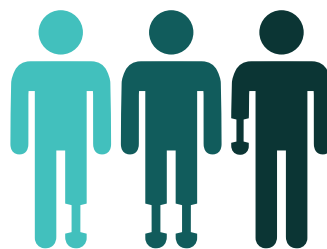
PUTUMAYO, UN CASO PARA OBSERVAR

Putumayo, departamento fronterizo del sur de Colombia, es una de las zonas más afectadas históricamente por el conflicto armado. Por tal razón, lo presentamos como un caso que ilustra de qué manera la guerra va a la escuela.

Las siguientes cifras, consultadas en el Registro Único de Víctimas, corresponden a las personas que han vivido -en Putumayo- un hecho victimizante entre 1984 y marzo de 2016. Los números son alarmantes si se comparan con los habitantes de la región: 310.132, de acuerdo con el último censo que reporta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



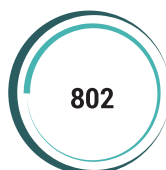
Acto terrorista, atentados y combates



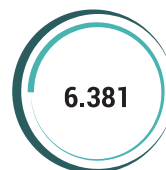
Homicidio



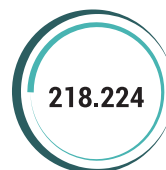
Amenazados



Delitos contra la libertad y la integridad sexual



Desaparición forzada



Desplazamiento forzado



Minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo



Tortura



Secuestro



Vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados



Abandono o despojo forzado de tierras



Pérdida de bienes muebles o inmuebles

El siguiente cuadro permite una aproximación al número de víctimas en edad escolar que habitan el departamento de Putumayo. Las cifras son resultado de información entregada por la Secretaría de Educación del departamento cotejada con datos abiertos del Ministerio de Educación Nacional.

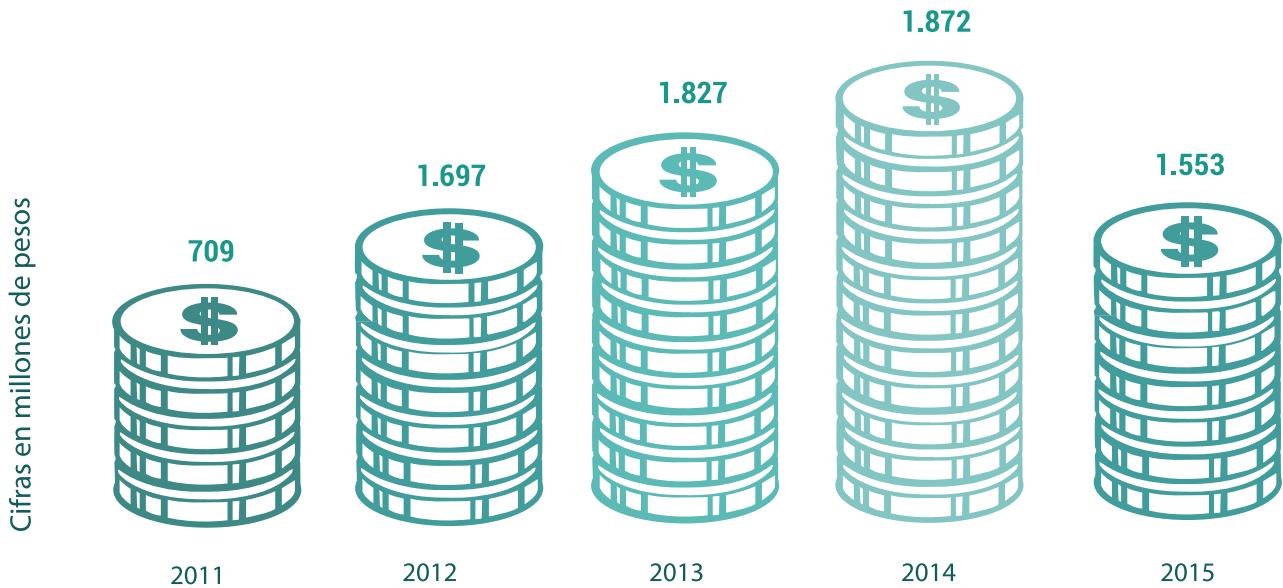
Víctimas del conflicto armado matriculadas en preescolar, primaria, secundaria y media en áreas rurales y urbanas entre 2011 y 2015					
Municipios	2011	2012	2013	2014	2015
Mocoa	3.530	3.565	3.843	4.391	4.352
Colón	202	216	227	258	245
Orito	1.324	1.267	1.423	1.681	1.771
Puerto Asís	3.322	3.315	3.485	3.850	3.831
Puerto Caicedo	454	422	478	519	732
Puerto Guzmán	700	593	611	710	704
Puerto Leguízamo	636	550	500	632	547
Sibundoy	509	471	560	624	651
San Francisco	176	156	180	193	188
San Miguel	545	587	655	816	948
Santiago	147	109	106	183	185
Valle del Guamuez	1.088	1.327	1.431	1.685	1.700
Villagarzón	1.404	1.473	1.657	1.677	1.679
TOTAL ANUAL	14.037	14.051	15.156	17.219	17.533

La Secretaría de Educación de Putumayo manifiesta que en los últimos seis años 155 maestros han sido víctimas de amenazas. Así mismo, reporta que en los últimos 4 años 41 docentes fueron declarados en riesgo extraordinario, y 23 tuvieron que ser trasladados por seguridad a otros departamentos.

Maestros amenazados en el marco del conflicto armado interno						
Municipios	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mocoa	3	5	2	3	2	
Colón						
Orito	3	6	3	4	6	4
Puerto Asís	1	7	4	5	13	3
Puerto Caicedo	2	1	3	4		2
Puerto Guzmán	3	3	4	1	2	2
Puerto Leguísimo	3	1	3	3	4	2
Sibundoy	1					
San Francisco		1				
San Miguel	5		1		1	2
Santiago	1		1			
Valle del Guamuez	1	3	3	4		1
Villagarzón	5	3	1	3	1	
TOTAL	28	30	25	27	29	16

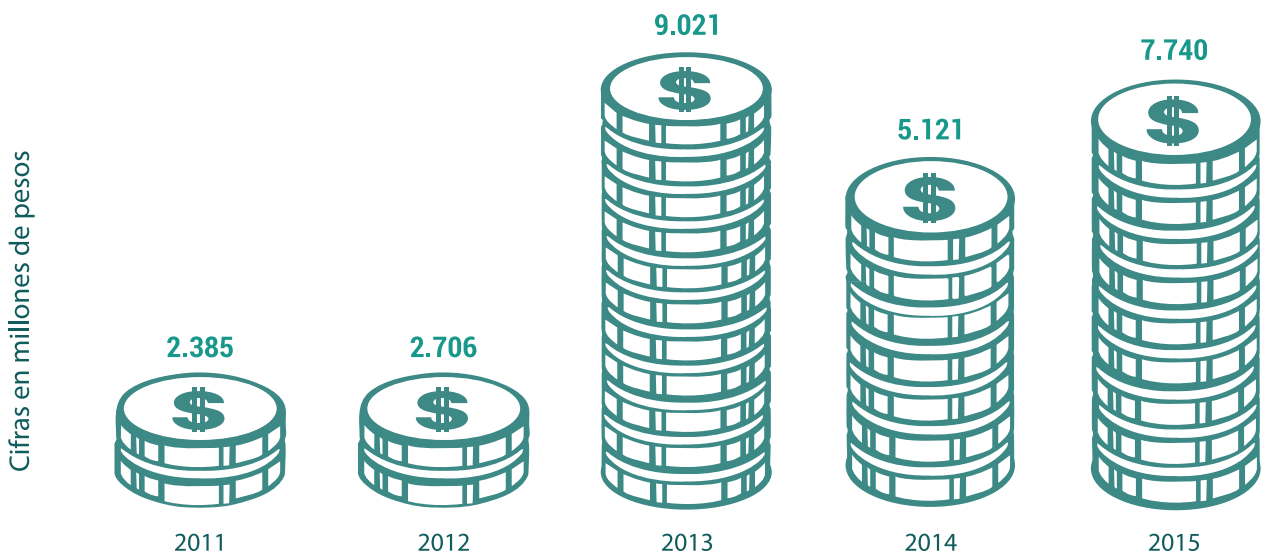
Putumayo cuenta con 67 internados de los que se benefician niñas, niños y adolescentes en situación de desplazamiento. La Secretaría de Educación del departamento resalta a estos sitios como parte sustancial de la estrategia para evitar la deserción escolar de la población vulnerable y su posible vinculación con grupos al margen de la ley. Dentro de los recursos económicos que deben invertirse para el sostenimiento de los internados sobresalen 7.660 millones de pesos que, entre 2011 y 2015, se han invertido en la alimentación de aproximadamente 3 mil estudiantes.

Recursos cofinanciados para alimentación de los estudiantes en los internados



El transporte escolar se contempla como otra de las líneas básicas dentro de las estrategias que buscan prevenir la deserción académica de las poblaciones víctimas del conflicto. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Educación, entre 2011 y 2015 se transfirieron a los 13 municipios una suma de 26 mil millones de pesos aproximadamente para mantener este plan.

Recursos de cofinanciación para el transporte escolar





Comunidades educativas del
Putumayo víctimas del conflicto
armado en 2013

**Institución educativa
Antonio Nariño**

Comunidad académica
afectada por la muerte
violenta de un docente.

Valle del
Guamuez

Orito

**Institución educati
José Asunción Silv**

La sede primaria se
encuentra ubicada
diagonal a la estac
la Policía. Por lo ta
institución perman
bajo amenaza por
enfrentamientos
armados. También
reporta la activació
un artefacto explos

afectadas por el conflicto de 2013 y 2015



Comunidades educativas del Putumayo víctimas del conflicto armado en 2014

Institución Educativa Rural San Carlos

Se reportó la presencia de un artefacto explosivo en la huerta escolar.

Institu Rural

Derram
produ
del me
afecta
a toda
educa
de gru
la inst

Orito

San Miguel

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Se encuentra una munición (sin explotar) que produce la amputación de tres dedos de la mano izquierda de un estudiante. 35 estudiantes más se vieron afectados.

Educación Maravelez

me de crudo que
ce contaminación
edio ambiente,
ndo directamente
a la comunidad
tiva. Amenazas
upos armados a
stitución.

**Sedes educativas en:
Herradura, Guadualito,
Alamos, Mogambo, Yet,
Diamante, Esperanza,
Germania**

Denuncian 8 eventos con artefactos explosivos (minas antipersonal) que afectan a 110 estudiantes aproximadamente, de diferentes instituciones educativas.

Valle del
Guamuez

Valle del
Guamuez

Valle del
Guamuez

Valle del
Guamuez

Centro etnoeducativo Malvinas

Artefacto explosivo (sin explotar) afecta a 17 estudiantes.

Jordán Guisia

Denuncian presencia del actor armado ilegal, y en otras ocasiones del actor armado legal transitando por la institución. Las directivas reportan que esto afecta a 500 estudiantes.

**Institución educativa
San José de Orito**

El pozo 6, ubicado diagonal a la institución sufrió un atentado. El hecho afectó a toda la comunidad educativa por el daño al medio ambiente.

**Centro Educativo
Rural Lucitania**

Detonación de una carga explosiva a menos de 10 metros del restaurante escolar.

Orito

Orito

Orito

Orito

**Institución educativa
San José de Orito**

Amenazas vía celular obligando a desalojar el establecimiento educativo.

**Institución
Jorge Eliecer**

Detonación de artefacto explosivo

Institución La Libertad

Los lanzamientos continuos de cilindros y artefactos explosivos a un campo de producción de hidrocarburos cercana a la institución han afectado la planta física.

Institución educativa rural San Carlos

Presencia de artefacto en la huerta escolar.

rito

Puerto
Asís

Puerto
Asís

San
Miguel

Institución educativa San Gaitán

n de
explosivo.

Centro Educativo Rural La Montañita

Presencia de la Fuerza pública en el establecimiento educativo. Se ha impedido el ingreso de alimentos para el restaurante escolar. También, se les ha negado a los maestros la posibilidad de acceder al plantel educativo.

Comunidades educativas del Putumayo víctimas del conflicto armado en 2015

Institución educativa rural El Tigre

Presencia de grupos armados ilegales y de la fuerza pública coloca en riesgo la integridad de los estudiantes. La institución reporta que se ha presentado la voladura de un oleoducto cercano a la institución, amenazando la vida de 456 estudiantes.



Institución educativa rural Jordán

En el río Jordán, la presencia de la guerrilla entra en contacto con los estudiantes, poniendo en riesgo a 491 menores. Además, la institución ha sido amenazada.

Centro educativo rural Las Malvinas

El 6 de julio de 2015 se produjo un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército, en la vía de la sede educativa la Yet, y tomaron como trinchera la escuela. El Ejército manifiesta que la zona escolar se encuentra totalmente minada.

Institución educativa rural Luis Vidales

El 27 de mayo se producen enfrentamientos entre las Farc y las fuerzas de la tropa naval, quienes deciden escudarse en la institución educativa, colocando en riesgo la vida de 86 niñas y niños, y 6 maestros que se encontraban en la jornada escolar.

e del
nuez

Valle del
Guamuez

Puerto
Asís

Puerto
Leguizamó

Institución educativa Guisia

lán, cercano
ón, la
a en
n
es.
s están en
más, el rector
hazado.

Centro educativo El Teteye

Caída de artefactos explosivos en predios del centro educativo.

FUENTES

Conpes 3712 de 2011

Ministerio de Hacienda. Presentación al Congreso de la República del Presupuesto General de la Nación 2016

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas

Registro Único de Víctimas

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación

Agencia Colombiana de Reintegración

Secretaría de Educación de Putumayo

Fundación Nuevos Horizontes

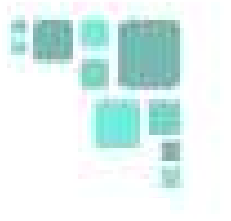
Comisión de paz del Senado de la República

Empresarios por la Educación

Unidad de Investigación Periodística

Departamento Académico de Comunicación Social y Periodismo

Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes



JULIANA CASTELLANOS DÍAZ

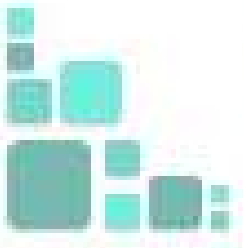
Comunicadora social y periodista de la Universidad de Manizales. Magister en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha cursado estudios en herramientas digitales para periodistas y herramientas en línea para la investigación periodística, en la Universidad de Guadalajara, México. Actualmente, dirige la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

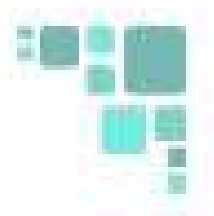
Ha escrito los libros: *Dos miradas un silencio, construcción de realidades mediáticas en las crisis del proceso de desmovilización paramilitar* (2011), y *Cuánto nos cuesta la guerra* (2012); además, artículos académicos sobre los medios digitales en América Latina y los observatorios de medios en Colombia. Su interés por el periodismo digital y el conflicto armado convergen en la dirección del trabajo *La guerra va a la escuela. Impacto del conflicto armado en la educación*, publicado en abril de 2016 por el diario *El Espectador*.

Correo:

jcastell@poligran.edu.co

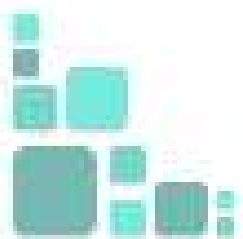
julicastediaz@gmail.com





Para mayor información
visita el sitio multimedia

LA GUERRA VA A LA ESCUELA



guerrayescuela.poligran.edu.co

